

4,60

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

114.º de 193 países

22.º de 35 países americanos

9.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES

4,45

TRATA DE PERSONAS **4,00**

TRÁFICO DE PERSONAS **4,50**

TRÁFICO DE ARMAS **5,50**

DELITOS CONTRA LA FLORA **4,00**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **4,50**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **2,00**

COMERCIO DE HEROÍNA **2,00**

COMERCIO DE COCAÍNA **7,00**

COMERCIO DE CANNABIS **6,50**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **4,50**



ACTORES CRIMINALES

4,75

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **4,00**

REDES CRIMINALES **5,50**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **4,50**

ACTORES EXTRANJEROS **5,00**



6,42

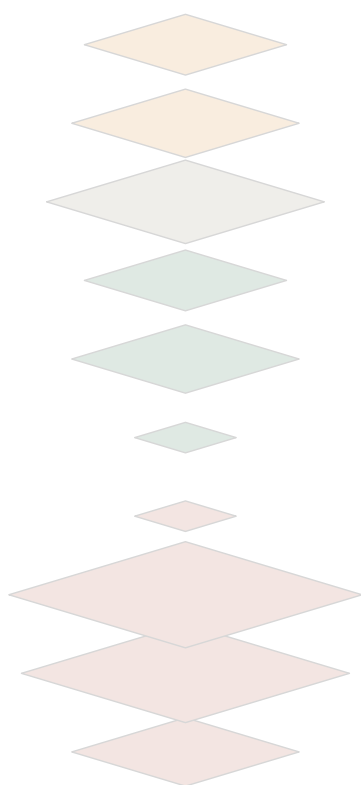
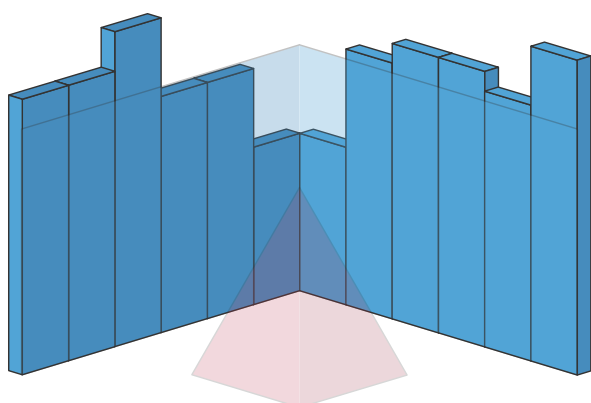
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

30.º de 193 países

4.º de 35 países americanos

2.º de 12 países de América del Sur





6,42

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

30.º de 193 países
4.º de 35 países americanos
2.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	7,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	7,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	8,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	7,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	7,00
PREVENCIÓN	6,50
ACTORES NO ESTATALES	8,00



4,60

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

114.º de 193 países
22.º de 35 países americanos
9.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES **4,45**



ACTORES CRIMINALES **4,75**



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Chile es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, principalmente para la explotación sexual y laboral. La explotación laboral se da en la minería, la agricultura, la construcción, la venta ambulante, la hotelería, los restaurantes, el sector de la confección y el servicio doméstico, siendo la mayoría de los perpetradores ciudadanos chilenos. Cabe destacar que los perpetradores utilizan cada vez más Internet para atraer a las víctimas y, a menudo, utilizan la violencia para intimidar a las personas contactadas. Las redes desmanteladas muestran niveles sofisticados de organización y roles diferenciados, con redes internacionales que involucran principalmente a personas latinoamericanas que buscan víctimas de Nepal, India, Bolivia, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Ecuador y China.

El mercado del tráfico de personas es facilitado por actores estatales e involucra a redes criminales con coordinación internacional y personas que facilitan la entrada a través de cruces fronterizos irregulares. República Dominicana, China y Venezuela son los principales países de origen del tráfico de personas hacia Chile, que también es un punto de tránsito hacia Argentina. Sin embargo, la existencia de coyotes de países fronterizos puede indicar que estas redes trafican sistemáticamente con personas de otros países y muchas de ellas perciben a Chile como su destino final.

TRÁFICO

En relación con las armas, Chile es un gran importador y un pequeño exportador. Es importante destacar que las rutas y modalidades utilizadas para la importación de drogas ilícitas a Chile están vinculadas con el tráfico de armas. También hay indicios de corrupción, aumento de los delitos cometidos con armas de fuego y grupos que venden armas desde las prisiones. Los cuerpos de seguridad han estado involucrados en la venta ilícita de armas, a veces reportando la pérdida de armas de fuego que luego venden a narcotraficantes. El aumento de la demanda de armas está directamente relacionado con un aumento en el mercado de drogas, lo que resulta evidente por la escalada de las tasas de homicidios relacionados con armas en el país. De los millones de armas lícitas e ilícitas en circulación, solo una pequeña parte está registrada en la Dirección General de Movilización Nacional. A pesar de ello, los delincuentes suelen pagar a personas sin antecedentes penales para que registren armas y luego denuncien su pérdida o robo. También se han importado ocasionalmente armas ilícitas desde Texas y Florida (Estados Unidos) a Chile mediante empresas fantasma a través del puerto de Iquique.

MEDIOAMBIENTE

La mayoría de los bosques de Chile son de propiedad privada y las oportunidades de delitos contra la flora en el país son bastante limitadas. Sin embargo, dado que la mayoría de los delitos contra la flora solo dan lugar a sanciones administrativas, la tala ilegal se produce en algunas zonas. Quizás lo más significativo es que Chile es un país de origen y destino del comercio ilícito de fauna exótica, como aves, monos y reptiles. Opera un mercado clandestino en el que se pagan grandes sumas por especies exóticas que se utilizan localmente como mascotas o por sus pieles. Es probable que los perpetradores sean pequeñas organizaciones criminales con conexiones con los países de origen, principalmente Brasil y Bolivia. Aunque los delitos relacionados con los recursos no renovables son limitados en el país, la minería ilegal es el predominante. Chile también es un país de tránsito para el oro de Perú con destino a Estados Unidos, Oriente Medio y Europa.

DROGAS

Se han detectado pocos casos de tráfico de heroína en Chile. En su mayoría, involucran a actores independientes que intentan importar heroína o mover la droga internamente. Parte de la heroína se importa de Colombia y existe evidencia de que se utilizan los mismos mecanismos para importar otras drogas, principalmente cocaína. Chile tiene una de las tasas de prevalencia de consumo de cocaína más altas de América del Sur y, además de ser un país de destino y tránsito, también es un importante proveedor de las sustancias controladas que se utilizan en la producción. Cabe destacar que los laboratorios clandestinos utilizados para diluir base de cocaína en el país han sido desmantelados. Chile está ubicado junto a dos importantes países productores de cocaína, Perú y Bolivia, y la cocaína se traslada a través de Chile a Australia, los Países Bajos, Jordania, Italia, Bélgica, Uruguay, Francia, Panamá, Noruega y Suecia. El mercado involucra a organizaciones criminales que tienen lazos con actores, cárceles y clientes extranjeros. Además, el aumento de la violencia relacionada con el mercado de las drogas es evidente en tiroteos y homicidios entre organizaciones rivales locales. Es probable que las drogas y las armas se importen al país de la misma manera.

Chile es un importante consumidor de cannabis en América Latina y el cannabis producido en el país alimenta principalmente la demanda interna. Paraguay es el principal distribuidor de cannabis en América, pero el cannabis «creepy» colombiano, conocido por sus altos niveles de tetrahidrocannabinol (THC), también se vende a los mercados de clase media y alta, incluyendo en Chile. El cannabis es transportado en parte por pequeñas redes criminales, principalmente colombianas, y, según se informa, algunos envíos de cannabis hacia Argentina pasan por Chile. El éxtasis y la feniletilamina son las sustancias sintéticas más importadas. Las importaciones de drogas sintéticas provienen de los Países Bajos, Alemania y España,

así como de Argentina y Colombia. Chile también es un país de tránsito de drogas sintéticas provenientes de Colombia. El mercado se dirige a los adultos jóvenes, pero la base de consumidores se ha expandido hasta abarcar diversos grupos socioeconómicos. La mayoría de las incautaciones tienen que ver con posesión individual, pero también se han identificado algunos casos de participación de organizaciones delictivas. En particular, se han incautado drogas sintéticas en las cárceles. El *modus operandi* más común para la importación ha sido el ingreso de drogas sintéticas a Chile a través del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

ACTORES CRIMINALES

El crimen organizado en Chile se caracteriza en gran medida por redes delictivas descentralizadas, en su mayoría clanes familiares anónimos, que operan en barrios marginales y están involucrados en el tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de personas y la trata de personas. Estas redes son mayoritariamente territoriales, utilizan bajos niveles de violencia y coordinan sus operaciones con actores extranjeros. Aunque el Gobierno afirma que estos grupos podrían desempeñar un papel importante en las protestas sociales actuales, no existe evidencia de que intenten influir en el proceso democrático.

Los grupos de tipo mafioso que operan en Chile también incluyen redes familiares de narcotraficantes y clanes familiares con liderazgo definido, un número de miembros pequeño a moderado y bajos niveles de control territorial. Sin embargo, algunos operan a nivel transnacional, coordinando el tráfico de armas, drogas y contrabando con actores extranjeros. Además, grupos de narcotraficantes utilizan a los presos para realizar sus operaciones.

Existen muchos informes de corrupción, particularmente en las fronteras de Chile, que, directa o indirectamente, facilitan los mercados delictivos, como el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas mediante protección o falta de control. Los funcionarios estatales también han sido acusados de estar involucrados en el tráfico de armas y drogas a nivel local. Cabe destacar que se ha reportado la pérdida de equipo militar que presuntamente se ha transferido posteriormente a grupos delictivos. Actores extranjeros, y organizaciones colombianas en particular, están involucradas en el mercado ilegal de cannabis en Chile. Además de los actores criminales locales que colaboran con grupos extranjeros, ciudadanos de países con fuertes flujos migratorios históricos hacia Chile también han estado presuntamente involucrados en la trata de personas.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Aunque se trata de un país con buena estabilidad, esta se vio amenazada en el 2019, tras las protestas nacionales masivas y las subsiguientes violaciones de derechos humanos, incluyendo lesiones y asesinatos perpetrados por los Carabineros. Tras meses de conflicto, los chilenos votaron en referéndum a favor de reescribir la Constitución. Se están implementando medidas punitivas para combatir el crimen organizado, incluyendo el despliegue del Ejército para combatir el narcotráfico y el contrabando. Además, el presidente Sebastián Piñera anunció un plan para incorporar medidas legislativas y administrativas de gobierno transparente, lucha contra el soborno y la corrupción, acceso abierto a los datos, gobierno inteligente, probidad pública y transparencia. Instituciones anticorrupción no gubernamentales también propusieron una agenda similar. Sin embargo, el Gobierno de Piñera ha sido menos transparente en la investigación y el enjuiciamiento de los agentes de seguridad responsables de las violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos. Además, las autoridades descubrieron una de las mayores operaciones de corrupción de la historia de Carabineros de Chile, en la que los funcionarios realizaban una estafa para aumentar sus salarios. No obstante, los niveles de corrupción se perciben como bastante bajos en el país.

Chile ha firmado la mayoría de los tratados internacionales relacionados con el crimen organizado y tiene acuerdos de extradición con dieciocho países. Chile también participa activamente en la cooperación internacional contra el crimen organizado, lo que se evidencia en una serie de operaciones policiales e incautaciones exitosas. En línea con los compromisos de Chile en el exterior, varias leyes nacionales abarcan el crimen organizado, incluyendo la trata y el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el control de armas y la evasión fiscal. Sin embargo, es necesario perfeccionar el marco legal respecto a los delitos contra la flora y los recursos no renovables, ya que estos solo se sancionan si existe alguna forma de evasión fiscal y la tala ilegal solamente conlleva una sanción administrativa.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Aunque Chile tiene una de las tasas regionales más bajas de inversión en el sistema judicial y de jueces per cápita, el Poder Judicial se considera en gran medida independiente. La Fiscalía de Chile cuenta con la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado. Sin embargo, las cárceles sufren de hacinamiento y los informes indican que los reclusos tienen un acceso insuficiente al agua y a los servicios de higiene, lo que se atribuye principalmente a la inexistencia de una

legislación penitenciaria, la corrupción y las deficiencias en materia de infraestructura e inversión. Aunque existen altas tasas de homicidio dentro de las cárceles, el sistema no está controlado por grupos criminales.

Mientras tanto, los principales cuerpos de seguridad de Chile son los Carabineros de Chile, la fuerza policial militarizada nacional administrada por el Ministerio del Interior, y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), una fuerza policial civil encargada de la investigación de delitos. Ambos tienen capacidades de inteligencia interna, al igual que los cuerpos militares, pero la principal organización de inteligencia de Chile es la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Además, Carabineros tiene su propia unidad antidrogas y de lucha contra el crimen organizado. La ley de inteligencia de Chile permite que los agentes de policía respondan a amenazas como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el uso de fondos reservados sin autorización judicial, pero la información resultante es inadmisibles en los tribunales. La falta de intercambio de información entre las fuerzas policiales, la ANI y otras organizaciones ha sido criticada; sin embargo, el intercambio de inteligencia con otros países parece eficaz. Además, se ha creado una fuerza de trabajo conjunta entre Carabineros, la PDI, las aduanas, las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Aeronáutica Civil para combatir el crimen organizado en la frontera norte de Chile. Chile comparte fronteras con dos importantes productores de cocaína, Perú y Bolivia, así como con Argentina, que también se ha convertido en un importante país de tránsito y destino para el tráfico de drogas. Las fronteras presentan muchas vulnerabilidades, incluyendo numerosos pasos fronterizos no autorizados. Chile también cuenta con puertos de importante tamaño, vulnerables al tráfico, y la expansión del canal de Panamá ha permitido el tránsito directo a los puertos de Valparaíso, San Antonio, San Vicente y Coronel, contribuyendo al aumento del riesgo de flujos de tráfico.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

La ley chilena abarca la financiación del terrorismo y el lavado de dinero y, lo que es más importante, los casos han sido debidamente enjuiciados en virtud de la legislación. La Fiscalía se encarga de investigar y llevar ante la justicia los casos de lavado de dinero, mientras que la Unidad de Análisis Financiero previene y detecta actividades sospechosas. En los últimos años se han incorporado más delitos a la lucha contra el lavado de dinero, entre ellos: malversación de fondos públicos, fraude al fisco, estafa, contrabando y tráfico ilícito de armas.

El marco regulador de la economía es moderadamente propicio para hacer negocios y el sector privado juega un papel importante en la economía. Años atrás, el Estado lanzó un programa para promover las micro, pequeñas y medianas empresas y mejorar el acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, el sistema burocrático y reglamentario dificulta el funcionamiento de las empresas, ya que el pago de impuestos se hace más costoso, debido a un aumento del impuesto sobre la renta de las sociedades. Sin embargo, la creación

de empresas se ha visto facilitada, gracias al registro en línea de las sociedades cerradas y la implementación de una plataforma electrónica que permite a los demandantes presentar sus denuncias iniciales en línea. Además, el régimen de transacciones garantizadas del país ha mejorado, gracias a la unificación del registro de garantías y a un nuevo marco legal para las garantías reales no posesorias, lo que requiere una mayor información corporativa y gestión de la aprobación de transacciones entre las partes interesadas.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Programa de Apoyo a Víctimas de Chile ayuda a las víctimas de la trata y el tráfico de personas con centros en todas las regiones y las víctimas y testigos menores de edad pueden dar testimonio mediante entrevistas pregrabadas. La Fiscalía cuenta con una unidad de atención a víctimas y testigos para brindar apoyo y protección a quienes están pasando por un proceso penal y la Política Nacional de Víctimas del Delito se enfoca en la participación de las víctimas en la toma de decisiones, la justicia restaurativa, el mejoramiento de los sistemas de investigación, el acceso a la información del caso y la compensación estatal. En general, el Gobierno cuenta con un marco bastante sólido para ayudar a las víctimas a salir de las formas contemporáneas de esclavitud. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol es el encargado de implementar los programas de prevención y rehabilitación de drogas y alcohol y la Subsecretaría de Prevención del Delito ejecuta otros programas en zonas geográficas vulnerables. El Gobierno también creó un Consejo de la Sociedad Civil para promover la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas, planes y programas de prevención y rehabilitación de drogas, y en el 2019 se lanzó el Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, centrado en la reforma policial, incluyendo la participación de actores no estatales. Además, la PDI ha creado la Brigada del Medio Ambiente, encargada de promover acciones de prevención de delitos contra la fauna y la flora. Aunque los esfuerzos de reducción de la pobreza en Chile son más eficaces que en otros países de la región, el país es considerado uno de los más desiguales del mundo desarrollado.

Chile ha realizado esfuerzos para promover la libertad de prensa y la cobertura de la violencia policial durante las protestas políticas ha sido sustancial. Aunque las ONG y los líderes de la oposición contribuyen con frecuencia en medios de comunicación electrónicos, la propiedad concentrada de los medios y la falta de recursos son un desafío permanente. En ocasiones se viola la confidencialidad de las fuentes de los periodistas y ciertos temas, como la corrupción política y las protestas de las comunidades indígenas mapuche, son tabú para los periodistas.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.